

POR RECOMENDACIÓN DE LA CEDHJ, PROCURADURÍA SUSPENDE A FUNCIONARIA

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) recibió por parte de la Dirección de Supervisión de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado la aceptación de la Recomendación 34/08, en la que se solicita suspender por 30 días naturales sin goce de sueldo a la agente del Ministerio Público Susana Ramos Zúñiga por violación del derecho a la legalidad, seguridad jurídica y negativa de asistencia a víctimas del delito.

La Recomendación fue dictada luego de recibir una queja que sustenta funciones irregulares y negligentes por parte de la funcionaria, quien tardó nueve meses y 14 días en integrar averiguaciones previas, lo que propició que los jueces Cuarto y Séptimo de lo Criminal decretaran la prescripción de la acción penal solicitada en las denuncias que la quejosa y su cónyuge interpusieron en la Procuraduría por haber sido víctimas en dos ocasiones distintas de accidentes automovilísticos.

Con base en las investigaciones realizadas, este organismo concluyó que la servidora pública fue omisa en otorgarles a las indagatorias el trámite ordinario y desahogar oportunamente las diligencias para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los inculpados en los dos hechos denunciados.

Con su actuar, confirma que incumplió con su obligación legal para dar seguimiento cabal y puntual a las funciones que desempeña.

La CEDHJ le recomendó al procurador de Justicia que inicie, tramite y concluya procedimiento administrativo en contra de la fiscal, donde tome en consideración la reincidencia en el incumplimiento de sus obligaciones y le sancione conforme en derecho corresponda.

Por tanto, la Dirección de Supervisión de Derechos Humanos de la PGJE remitió copia del procedimiento administrativo PAI 071/2008-C con el que se documenta el cumplimiento del punto primero de la Recomendación.

Los hechos

El 3 de junio de 2008 la CEDHJ recibió una queja contra personal de la PGJE. La agraviada relató que en 2006 ella y su cónyuge fueron víctimas de dos percances viales en distintas fechas; en ambas ocasiones se iniciaron las investigaciones correspondientes en la agencia de Averiguaciones Previas número 17/C, pero los retrasos en las integraciones perjudicaron la acción penal y la reparación del daño, a pesar de que en tiempo y forma fueron denunciados los hechos.

En el informe rendido a la Comisión la agente del Ministerio Público involucrada negó los hechos atribuidos; sin embargo, no hubo ningún elemento de prueba que corroborara su versión. Además se comprobó la conducta reiterada de la fiscal en situaciones similares.